

COLECTIVO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIALES
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

CEISAC

GUERRA EN LA RIBERA

INFORME DE CONTEXTO SOBRE LA
RECONFIGURACIÓN DEL CONFLICTO
ARMADO EN EL BAJO CAQUETÁ, EL BAJO
PUTUMAYO Y EL ALTO AMAZONAS

MARZO - ABRIL DE 2025

MIRADOR DE MONTE

CONTENIDO

PARTE 1: HECHOS RECIENTES

EL BAJO CAQUETÁ VIVE UNA ESCALADA DE VIOLENCIA: MINAS ANTI-PERSONALES, AMENAZAS, SAQUEOS Y PRESENCIA ARMADA EN VEREDAS RIBEREÑAS. LA COMUNIDAD DENUNCIA INTIMIDACIONES Y CONFINAMIENTO.

PARTE 2: LA GEOGRAFÍA AMAZÓNICA COMO DETERMINANTE DEL CONFLICTO

EL CONTROL DEL RÍO CAQUETÁ DEFINE LA GUERRA. EL EMC FARC DOMINA LA ZONA FLUVIAL. EL GRUPO JORGE SUÁREZ BRICEÑO AVANZA DESDE EL CAGUÁN. LOS CDF INCURSIONAN DESDE PUTUMAYO. LAS COMUNIDADES ESTÁN EN MEDIO.

PARTE 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONFLICTO NO SE LIMITA A UN OPERATIVO CONTRA “MORDISCO”. HAY UNA RECONFIGURACIÓN ARMADA Y UNA DISPUTA DE PODER SIN UNA ESTRATEGIA ESTATAL CLARA PARA LA PAZ.



La región amazónica del sur de Colombia —especialmente en el bajo Caquetá, bajo Putumayo y alto Amazonas— ha sido históricamente escenario de dinámicas complejas de conflicto armado, presencia estatal fragmentada y una constante disputa por el control territorial. En los últimos años, estos territorios han experimentado un recrudecimiento de las violencias y una reconfiguración de los actores armados, lo que ha encendido nuevas alertas sobre el horizonte humanitario que se perfila en estas zonas de vital importancia ecológica y geopolítica.

El Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales de la Amazonia Colombiana (CEISAC) ha venido desarrollando una lectura de coyuntura basada en análisis de campo, con el fin de aportar insumos para la comprensión de los factores que configuran la actual crisis humanitaria. A través de este trabajo se busca no solo describir los hechos recientes, sino también ofrecer una interpretación contextual que permita a la opinión pública, a las autoridades y a la sociedad civil en general, comprender el carácter y la magnitud del conflicto que se despliega en la Amazonia colombiana.

La coyuntura actual está marcada por enfrentamientos entre diversos actores armados: estructuras que surgieron tras el Acuerdo de Paz de 2016, grupos que decidieron marginarse de dicho proceso y continúan operando de forma ilegal, y las fuerzas del Estado, ahora articuladas bajo una estrategia política denominada “Paz Total”. Esta confluencia de actores ha generado tensiones crecientes, así como nuevas formas de victimización para las comunidades campesinas e indígenas que habitan estos territorios.

En este contexto, el presente escrito se organiza en tres partes: la primera, dedicada a presentar los hechos recientes del conflicto armado en la región; la segunda, enfocada en delinear un panorama más amplio sobre la situación actual y sus implicaciones; y la tercera, en la que se recogen algunas conclusiones orientadas a la reflexión y la formulación de propuestas para la protección de los derechos humanos y la construcción de paz en la Amazonia.

HECHOS RECIENTES

En marzo y abril el conflicto armado se ha intensificado en las regiones del bajo Caquetá, Putumayo y alto Amazonas.

Durante el primer trimestre de 2025, la región amazónica del bajo Caquetá, junto con zonas del bajo Putumayo y el alto Amazonas, ha sido escenario de una creciente intensificación del conflicto armado. Esta situación se ha expresado en múltiples hechos violentos y en el fortalecimiento del control territorial por parte de distintos grupos armados ilegales, así como en una presencia militar sostenida del Estado, lo cual ha generado tensiones, temor generalizado y afectaciones humanitarias significativas para la población civil.

MINADO DE TERRITORIOS Y VÍCTIMAS CIVILES

El 14 de marzo de 2025, en la vereda Peñas Rojas del Caguán, un campesino identificado como Germán Rodríguez perdió la vida tras pisar accidentalmente una mina antipersonal mientras realizaba labores agrícolas. Este hecho ilustra el alto nivel de riesgo que enfrentan los habitantes rurales por la presencia de artefactos explosivos sembrados en áreas de uso cotidiano.

RESTRICCIONES DE MOVILIDAD Y CONTROL TERRITORIAL

En diferentes puntos de la región, los grupos armados han impuesto restricciones a la movilidad. De acuerdo con testimonios recogidos, estos actores han prescrito una franja de seguridad que va de los 1.500 a los 2.500 metros selva adentro desde la última vivienda de cualquier centro poblado ribereño. Dentro de esta franja es posible transitar con relativa seguridad; fuera de ella, el riesgo de enfrentamientos, minas o presencia armada es alto.

Simultáneamente, estos grupos han llegado a veredas y centros poblados a lo largo del río Caquetá, convocando reuniones comunitarias en las que comunican sus normas de convivencia y control. En estas reuniones, advierten sobre comportamientos prohibidos y establecen castigos, muchas veces con amenazas de muerte, en caso de desobediencia.

PRÁCTICAS DE VIGILANCIA E INTIMIDACIÓN

Tanto los grupos armados ilegales como la Fuerza Pública (Ejército Nacional e Infantería de Marina) han desarrollado prácticas de control social mediante la revisión de celulares de los pobladores. Estas revisiones se concentran especialmente en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y en el contenido de álbumes fotográficos, en operativos realizados en retenes ubicados en bocanas de los ríos Peneya y Caguán y otras zonas fluviales del río Caquetá.

DISPUTAS TERRITORIALES Y ENFRENTAMIENTOS ARMADOS

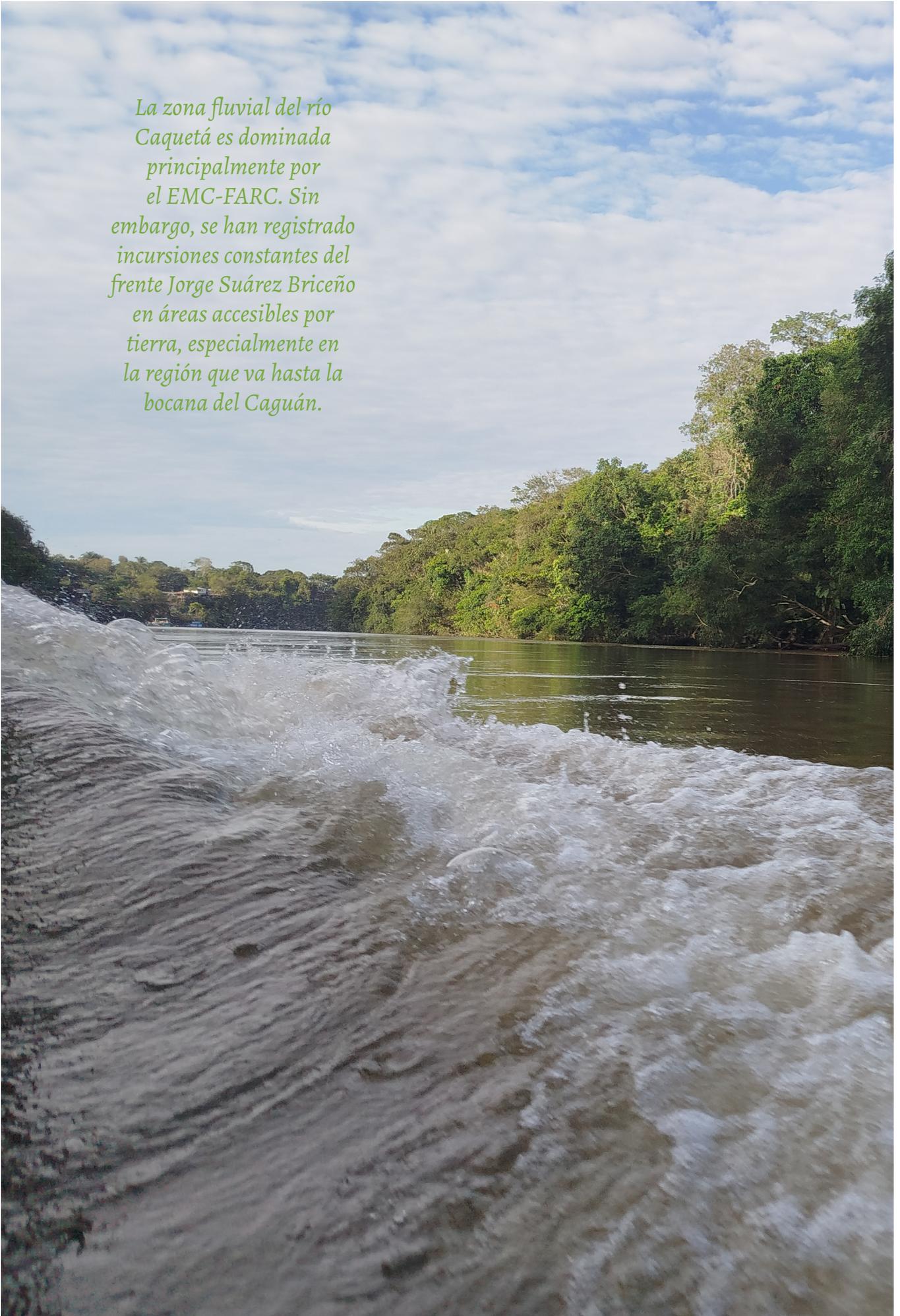
La zona fluvial del río Caquetá es dominada principalmente por el EMC-FARC. Sin embargo, se han registrado incursiones constantes del frente Jorge Suárez Briceño en áreas accesibles por tierra, especialmente en la región que va hasta la bocana del Caguán. A su vez, los Comandos de Frontera (CDF) han realizado entradas esporádicas desde el costado del Putumayo hacia zonas interiores del Amazonas.

Esta disputa por el control territorial ha derivado en enfrentamientos entre estos grupos armados, provocando paros armados como el que tuvo lugar tras la incursión del Jorge Suárez Briceño en la vereda Peñas Rojas. Durante estos paros, la población se ve forzada a confinarse, cesar sus actividades económicas y enfrentar situaciones de desabastecimiento.

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA

En respuesta a la creciente presencia y movilidad de actores armados ilegales, la Fuerza Pública ha intensificado sus operaciones en la región, particularmente mediante intervenciones aéreas en zonas donde se presume la presencia de

La zona fluvial del río Caquetá es dominada principalmente por el EMC-FARC. Sin embargo, se han registrado incursiones constantes del frente Jorge Suárez Briceño en áreas accesibles por tierra, especialmente en la región que va hasta la bocana del Caguán.





MIRADOR DE MONTE



mandos del EMC-FARC. Estas operaciones han ocasionado bajas en las filas de dicho grupo armado, generando movilizaciones de familiares y simpatizantes para la recuperación de los cuerpos. Asimismo, se han reportado casos de combatientes desaparecidos tras los bombardeos, lo que ha incrementado la incertidumbre en las comunidades rurales cercanas a las zonas de combate.

Por otro lado, se han llevado a cabo operativos terrestres contra estructuras armadas específicas, como los que han tenido lugar en las veredas Viotá y Palo Gordo, dirigidos contra el jefe armado conocido como “Paisa Duver”. No obstante, estos operativos han sido percibidos de manera ambigua por la población civil: mientras por un lado se considera que buscan debilitar las estructuras armadas ilegales, también se señala la limitada efectividad de la Fuerza Pública en impedir la entrada y libre circulación de estos grupos en caseríos y veredas.

Particular preocupación ha generado la percepción de posibles omisiones o tolerancia por parte de las autoridades. Por ejemplo, tras la incursión del grupo armado comandado por alias “Calarcá” en la vereda Peñas Rojas, pobladores reportaron que, horas después del paso del grupo armado, miembros del Ejército descendieron por la misma ruta sin haber evitado previamente el ingreso del grupo irregular. Este hecho ha alimentado en la comunidad la sospecha de una posible coordinación, o al menos una falta de respuesta oportuna por parte del Estado, lo que incrementa la desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

HECHOS DE INTIMIDACIÓN Y SAQUEO EN PEÑAS ROJAS

El 15 de abril de 2025, la comunidad de la vereda Peñas Rojas, en el municipio de Solano (Caquetá), denunció la incursión de un grupo armado conformado por entre 20 y 30 hombres, al mando de alias “Calarcá” y un sujeto identificado como “Urías”. Testigos indicaron que había más hombres rodeando el caserío desde el monte. El grupo reunió a la comunidad en la caseta comunal, donde profirieron amenazas directas como:

“El que tenga vínculos con Iván Mordisco, que se vaya de la vereda o lo matamos.”

“La población reportó que, tras el paso del grupo de Calarcá, por el mismo camino descendió el Ejército Nacional, lo que generó entre los pobladores una fuerte sospecha sobre una posible coordinación”

Asimismo, afirmaron su intención de tomar el control del territorio. Luego de la reunión, los armados irrumpieron en al menos ocho viviendas, de las cuales se llevaron alimentos, enseres básicos y productos de tiendas comerciales. Aunque no todas las casas fueron saqueadas, el mensaje fue claro: la comunidad está bajo amenaza directa.

Desde veredas vecinas, la población reportó que, tras el paso del grupo de Calarcá, por el mismo camino descendió el Ejército Nacional, lo que generó entre los pobladores una fuerte sospecha sobre una posible coordinación o, en el mejor de los casos, una omisión grave por parte de la Fuerza Pública al permitir el ingreso armado sin resistencia.

Particular preocupación ha generado la percepción de posibles omisiones o tolerancia por parte de las autoridades.



LA GEOGRAFÍA AMAZONICA COMO DETERMINANTE DEL CONFLICTO

La configuración territorial del bajo Caquetá, el bajo Putumayo y el alto Amazonas condiciona profundamente la dinámica del conflicto armado en la región. Se trata de un entorno marcado por la selva húmeda tropical, donde predominan los ríos como vías naturales de comunicación y donde las carreteras son casi inexistentes. La movilidad depende, en su mayoría, de rutas fluviales y, en menor medida, del transporte aéreo en puntos estratégicos como Puerto Leguízamo y Araracuara.

Esta realidad ha generado condiciones de aislamiento persistente que no solo afectan la vida cotidiana de las poblaciones, sino que también estructuran las estrategias de los actores armados. El control de los corredores fluviales se convierte en un elemento central de la guerra, ya que garantiza la capacidad de desplazamiento, aprovisionamiento y proyección de poder sobre amplias zonas. Quienes logran establecer una presencia estable a lo largo de estos ríos obtienen ventajas militares, logísticas y políticas significativas.

El control de los
corredores fluviales
se convierte en un
elemento central de
la guerra, ya que
garantiza la capacidad
de desplazamiento,
aprovisionamiento y
proyección de poder sobre
amplias zonas.

La estrategia oficial se enfoca más en la contención que en la transformación del territorio, lo cual se traduce en una débil interlocución con las comunidades fluviales

LIMITACIONES DE LA PRESENCIA ESTATAL



En esta región, la presencia del Estado colombiano es intermitente y, por lo general, restringida a operaciones militares puntuales desde bases como La Tagua. Estas intervenciones no van acompañadas de una estrategia sostenida de acompañamiento institucional, ni de programas sociales que permitan disputar la legitimidad territorial a los grupos armados ilegales.

La planeación estatal, además, suele responder a una lógica centralista y cartográfica que no se corresponde con las dinámicas locales. La estrategia oficial se enfoca más en la contención que en la transformación del territorio, lo cual se traduce en una débil interlocución con las comunidades fluviales y en una percepción generalizada de ausencia institucional prolongada.

CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL DEL EMC-FARC

El Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) ha logrado establecer una presencia consolidada a lo largo del río Caquetá, en una extensión que va desde la bocana del Yará hasta zonas cercanas a la frontera con Brasil, pasando por puntos estratégicos como Araracuara. Este grupo armado ejerce control efectivo sobre el tránsito fluvial y ha desplegado estructuras organizativas en varias localidades, lo que les ha permitido mantener una influencia constante en la región.

Su dominio no solo es de carácter militar, sino también

regulador: controla el transporte, impone restricciones de movilidad y establece normas que configuran una forma paralela de gobernanza. Este control le ha permitido impedir el ingreso de otros grupos armados por la vía fluvial y fortalecer sus propias rutas logísticas y de comunicación interna.

AVANCE DEL EMBF POR LA ZONA DEL CAGUÁN

El Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), surgido del fraccionamiento con el EMC-FARC, ha concentrado su expansión en la zona del Caguán, una ruta estratégica de acceso selvático hacia el río Caquetá. Su objetivo ha sido extender su dominio desde zonas de retaguardia hasta sectores donde aún tiene presencia el EMC, como el área de Peñas Rojas, punto clave para cerrar el control territorial sobre la ruta que conecta con la bocana del río.

En este contexto se han registrado incursiones armadas, amenazas y enfrentamientos. La cercanía entre los movimientos del EMBF y posteriores desplazamientos de la Fuerza Pública por los mismos corredores ha generado inquietudes sobre posibles omisiones institucionales o falta de acciones efectivas para prevenir el avance de

este grupo. Aunque no se dispone de pruebas concluyentes, este tipo de situaciones ha sido interpretado por diferentes sectores como un signo de debilidad operativa o permisividad estatal.

INCURSIONES INTERMITENTES DE LOS COMANDOS DE FRONTERA (CDF)

Los Comandos de Frontera (CDF) también mantienen una estrategia de influencia sobre esta región, particularmente desde el eje que conecta el río Putumayo con el río Caquetá. Aunque su capacidad de control es menor en el tramo fluvial del Caquetá debido a la presencia hegemónica del EMC-FARC, los CDF han realizado incursiones terrestres intermitentes, principalmente a través de zonas selváticas de difícil vigilancia.

Estas irrupciones suelen ser rápidas y con fines de advertencia o demostración de fuerza, sin que se establezca una presencia prolongada. Aunque su capacidad de dominio en esta parte del territorio es limitada, su accionar contribuye a una sensación constante de inestabilidad y disputa armada, especialmente en veredas situadas en los márgenes de influencia entre un grupo y otro.



En este contexto, es preocupante la ausencia de una política integral de seguridad y construcción de paz que contemple:

1. El fortalecimiento de la presencia institucional del Estado en clave social, no solo militar, especialmente en las comunidades ribereñas que viven en condiciones de aislamiento y vulnerabilidad.
2. La implementación de mecanismos de verificación del cese al fuego, con garantías reales de protección para las comunidades.
3. El reconocimiento de la territorialidad amazónica como una categoría clave en el diseño de la paz, entendiendo la particularidad ecológica, cultural y geopolítica de esta región.
4. La atención urgente a los impactos humanitarios del conflicto actual, incluyendo confinamientos, restricciones de movilidad, violencia contra la población civil y estigmatización de líderes sociales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La situación actual en la zona baja del departamento de Caquetá, y su conexión con el Putumayo y el Amazonas, no puede reducirse al operativo militar contra alias “Iván Mordisco” ni a las declaraciones de funcionarios que insisten en personalizar el conflicto. Lo que se vive en esta región es el resultado de una compleja disputa entre tres estructuras armadas ilegales —el EMC-FARC, el EMBF y los CDF—, cuyas confrontaciones no solo son de carácter militar o territorial, sino que también responden a lógicas económicas (control de rutas de movilidad, recursos naturales y economías ilegales) y a modelos de orden armado en disputa.

Este conflicto se desarrolla en un escenario particularmente delicado: una geografía de difícil acceso, marcada por la exclusión histórica del Estado, donde la autoridad estatal es débil y donde los actores armados han sabido construir mecanismos de control, regulación y cohabitación forzada con las comunidades locales. Las

tensiones no se explican únicamente por el control del territorio físico, sino también por la lucha por imponer un proyecto político-militar dentro del vacío institucional que persiste en esta región.

En este marco, la negociación de paz entre el gobierno nacional y el EMBF, con una prórroga del cese al fuego bilateral, ha tenido un efecto indirecto pero muy evidente: este grupo ha centrado sus esfuerzos en desplegar acciones ofensivas contra el EMC-FARC, en una dinámica que ha reconfigurado el equilibrio de fuerzas en la zona. La ausencia de enfrentamientos directos con la Fuerza Pública le ha dado al EMBF un margen de maniobra táctico que le ha permitido avanzar sobre territorios en disputa, especialmente en la zona del Caguán.

Al mismo tiempo, se ha intensificado la presión militar del Estado sobre los mandos del EMC-FARC, mediante operativos selectivos y bombardeos aéreos, en un patrón que refleja una estrategia de anulación militar, sin que se

evidencien avances significativos en una salida negociada o en medidas de carácter social, institucional o humanitario para las comunidades afectadas. Esta asimetría en el tratamiento militar y político a los distintos grupos genera interrogantes sobre la coherencia y los objetivos reales de la política de paz en esta región de la Amazonia.

En suma, lo que está en juego no es solo el control de unos kilómetros de selva, sino la posibilidad real de que la Amazonia colombiana se mantenga como territorio en disputa entre armados ilegales y desatendido por el Estado, o que pueda transitar hacia un proceso de reconstrucción territorial con enfoque de paz, justicia social y soberanía institucional.

Este conflicto se desarrolla en un escenario particularmente delicado: una geografía de difícil acceso, marcada por la exclusión histórica del Estado